



## Río+20: Una nueva oportunidad

Dos décadas después del trascendental encuentro de 1992, la ciudad brasileña se dispone a ser escenario de una nueva cumbre cuyo principal desafío es reformar la manera de enfrentar los problemas ambientales que aquejan a la Tierra. ¿Habrà voluntad de los estados para lograr consensos vinculantes?



Antonio Zambrano Allende

# De cumbre a cumbre

Las Cumbres de la Tierra son conferencias que la Organización de las Naciones Unidas ha venido desarrollando en los últimos cuarenta años para que representantes de los distintos estados del mundo debatan las medidas a tomar respecto a la protección del medio ambiente y a la aplicación de un enfoque de desarrollo sostenible que permita el crecimiento y el combate de la pobreza, en paralelo con la conservación de los ecosistemas. Eso, al menos, en teoría.

El nombre oficial para tales encuentros es Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. La primera de estas conferencias se llevó a cabo en Estocolmo

(Suecia) en junio de 1972. Sin embargo, fue la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 la que marcaría un hito en la construcción de compromisos conjuntos: en el marco de este encuentro se suscriben la Agenda 21, la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Declaración sobre los Bosques y Masas Forestales, y la Convención Marco sobre el Cambio Climático [UNFCCC por sus siglas en inglés]. A partir de ésta última se elabora posteriormente el Protocolo de Kioto, el documento vinculante sobre cambio climático más importante hasta hoy y que pretende poner metas importantes para que los principales países causantes del citado fenómeno mundial asuman plenamente sus responsabilidades.

Veinte años han transcurrido desde aquella cumbre y otras más se han celebrado sin menguar ni superar la trascendencia de los acuerdos asumidos entonces. Hoy, dos décadas más tarde, nos encontramos en los preparativos para una nueva Cumbre de la Tierra.

Si bien es cierto que la Cumbre de Río de 1992 instauró un marco mundial para el tratamiento de los problemas ambientales, así como para la profundización del enfoque de desarrollo sostenible como instrumento ideológico

para la construcción de políticas eficientes, dicho esquema fue edificado en el ámbito de los modelos de producción capitalista. En otras palabras, la tragedia del cambiar algo para no cambiar jamás se mantiene incólume.

Mientras esto sucede, el acceso al agua y la tierra ha disminuido en los últimos años a niveles de infarto. Aparte, más de 1,400 millones de personas no tienen electricidad y los gases de efecto invernadero se han elevado alrededor del 40% entre 1990 y el 2010.

En ese sentido, ¿qué podemos esperar de la Cumbre de la Tierra Río+20?

A diferencia de su homónima de hace 20 años, la cumbre que se realizará entre los días 20 y 22 de junio de este año no pretende generar grandes cambios que reduzcan emisiones ni solucionar

el problema de las emanaciones a través de un profundo viraje en la manera de pensar el desarrollo. En cambio, este encuentro trae consigo un paquete de nuevos temas que reconfigurarán la manera de encarar la problemática medioambiental en el mundo. Estos nuevos invitados se verán sintetizados por dos grandes ejes para el debate: 1. La economía verde en el contexto de la lucha por la erradicación de la pobreza, y; 2. El marco institucional que favorezca el desarrollo sostenible.

Si a esto le sumamos la pretensión del resto de las jornadas -garantizar la renovación de los compromisos de desarrollo sostenible y evaluar los avances hacia los objetivos acordados a nivel internacional de desarrollo- y lo comparamos con los fallidos logros alcanzados en las Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático [COPs] de los últimos años, tendremos un panorama de techo bajo y muy poco alentador.

Esto porque la economía verde como un instrumento teórico que se pretende engarzar al desarrollo sostenible le brinda una nueva prioridad a las tecnologías que se empiezan a desarrollar para el control ambiental así como al manejo del mercado para la solución de los problemas climáticos en el mundo, lo cual puede significar el crecimiento de los mercados de carbono;

esos donde los países en desarrollo o las empresas transnacionales ponen a disposición grandes hidroeléctricas o proyectos que afirman no contaminan el ambiente para ser admitidos dentro de tales mercados y se les retribuya su derecho a seguir emitiendo Gases de Efecto Invernadero [GEI] a la atmósfera. Sin ir muy lejos, varias minas en Perú ya están presentando Mecanismos de Desarrollo Limpio [MDL] para la construcción de hidroeléctricas en la cuenca amazónica. Esta es la clase de debates perversos sobre los cuales girarán algunos de los puntos de la próxima cumbre.

Es seguro que los efectos de la Cumbre de Río+20 no se dejarán sentir inmediatamente; sin embargo, la posibilidad de darle un respiro al sistema capitalista a través de la incorporación definitiva de la naturaleza como factor de especulación e intercambio permeará todas las esferas de la cooperación internacional y sus posibilidades de lucro. La cara del capitalismo empezará a cambiar nuevamente para sonreírnos sin vergüenza en algunos años, cuando finalmente nos volvamos a dar cuenta que el problema no es el medio ambiente sino las relaciones sociales de producción depredatorias de un sistema que nos aproxima cada vez más al vertiginoso camino de la extinción.

**Veinte años han transcurrido desde aquella cumbre y otras más se han celebrado sin menguar ni superar la trascendencia de los acuerdos asumidos entonces.**





## La caja de Pandora

Fabian Simeon

No hay duda: Los mercados han fallado. Estamos cambiando el clima del planeta, agotamos los recursos marinos, contaminamos nuestras fuentes de agua y los suelos. Y al parecer, nadie es responsable. Según el informe del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente (PNUMA) sobre la Economía verde, el desastre ambiental que enfrentamos obedece a la información incompleta y la mala asignación de capital y recursos. Por ende, proponen "reajustes" que pasan por "mejorar" las reglas del mercado; aplicar una capitalización total de la naturaleza; mejorar la infraestructura comercial internacional; y hacer que los estados apliquen mejores normas ambientales. Basta con eso y la Tierra estará a salvo, afirman... Se trata, a todas luces, de una propuesta frágil y bastante controversial, tomando en cuenta que la realidad es más compleja y mucho más peligrosa. Y decimos peligrosa porque la influencia de unos pocos actores en el diseño de la Economía verde para ajustarla a sus propios fines e intereses es alta.

Un estudio del Instituto Federal de Tecnología de Zurich (Suiza) reveló que el ochenta por ciento de la economía mundial está manejada por unas 700 empresas transnacionales, y que sólo ciento cuarenta y siete compañías, principalmente financieras, tienen el control total de cuarenta por ciento de la economía del planeta. Dichos actores no son reconocidos por un elevado comportamiento ético, transparente ni participativo. Muchos ni siquiera respetan las reglas del mercado como demuestran los innumerables fallos judiciales en diferentes países a causa de competencia desleal o la construcción de cárteles. Además, estos actores manejan economías más grandes que las de muchos países y tienen muchas posibilidades para influir en las políticas de estados y, al mismo tiempo, usan todas las posibilidades para evitar o minimizar impuestos; de esta forma, privan a los estados de recursos para reforzar la fiscalización ambiental. Por citar un ejemplo local, el nuevo gigante de materia prima Glencore-Xstrata tiene ventas por 178,800 millones de dólares al año, 25,000 millones de dólares más que el producto bruto interno (PBI) del Perú. El imperio Nestlé puede gastar en un año 15,000 millones de dólares en administración y marketing, monto que equivale a casi la mitad del presupuesto del Estado peruano. Todo sin obligaciones de rendir cuentas a nadie.

Además del sector empresarial, el PNUMA atribuye un rol importante a las entidades financieras internacionales y nacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil para lograr la transición hacia una Economía verde. Pero son justo aquellas entidades las que

**Dichos actores no son reconocidos por un elevado comportamiento ético, transparente ni participativo. Muchos ni siquiera respetan las reglas del mercado**

financian principalmente la infraestructura que se orienta a las necesidades del comercio internacional y de las transnacionales, y no de la pequeña agricultura o del microempresariado. En el caso de Perú, en lugar de invertir intensamente en la interconexión de los mercados locales se financia tres carreteras interoceánicas para estimular los flujos internacionales, poniendo en peligro los últimos bosques vírgenes de la Amazonía. O se sufragara la construcción de represas para generar energía que serviría a la gran minería en lugar de invertir masivamente en la difusión de sistemas de energía descentralizada, limpia y renovable. Son estos actores, en especial en el sector financiero, que no ofrecen mayores garantías de ser capaces de actuar por el bien común y proteger de manera óptima al planeta.

Los mercados financieros han colapsado en el 2008, a pesar del control más riguroso por parte de cada inversor mismo, sea particular, una empresa, un estado o hasta una agrupación criminal organizada. Pero es la sociedad la que paga el precio por la quiebra. Cabe preguntarse entonces: ¿Queremos abrir a estos mismos actores el acceso a los últimos recursos naturales que nos quedan con el mismo modelo económico sólo con un poco más de pintura verde? Ya hoy en día se observan los primeros conflictos y engaños, ya sea con la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), los mercados de carbono o la concentración de tierras.

Y eso sólo es el inicio. Estamos a punto de abrir la caja de Pandora. Prepárense.

## Cumbres alternativas

# La respuesta de los movimientos sociales

**A pocos meses de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, mejor conocida como Río+20, cabe hacer un análisis sobre los resultados poco alentadores que se obtuvieron en las últimas cumbres y las alternativas que actualmente presentan los movimientos sociales.**

Arturo Ayala

Río 1992 tuvo como base el documento *Nuestro Futuro Común*, que resultó contradictorio pues a pesar del grave deterioro ambiental -notorio en esos años y causado mayoritariamente por los modelos de producción y consumo capitalista- no dio la respuesta esperada.

Este informe es el que daría vida al denominado "desarrollo sostenible", una nueva forma de analizar los procesos de desarrollo que permitiría relanzar el crecimiento y eliminar la pobreza, avanzando en el desarrollo tecnológico que facilite la producción de cada vez más con cada vez menos insumos materiales y energéticos.

El planteamiento de desarrollo sostenible fue bien recibido por las élites, pues en lo formal recogía los cuestionamientos al desarrollo, aunque en realidad reforzaba los planteamientos de fondo. Este enfoque ha operado como un dispositivo para tranquilizar a los críticos y legitimó por largos años la globalización neoliberal.

Dos décadas después ha quedado demostrado -a pesar de lo que afirmen los documentos del PNUMA- que el balance de Río 1992 al día de hoy es ampliamente negativo. El desarrollo sostenible no fue más que una ilusión. En estos años no sólo se ha profundizado el modelo que genera pobreza, desigualdad y violaciones de los derechos fundamentales de las personas, sino que la crisis ambiental y climática es aún más dramática, ya que interrelacionada con la económica y alimentaria nos colocan frente a una verdadera crisis civilizatoria.

Esta situación es reconocida, en parte, por la Organización de las Naciones Unidas en la versión borrador del documento *El futuro que queremos*, publicado el 10 de enero de este año y que será negociado en Río+20 con el aporte de todos los Estados del planeta y que sostiene: "El sexto de la población del mundo padece una pandemia de des-

nutrición, y las epidemias son amenazas omnipresentes. El desarrollo insostenible ha aumentado la presión sobre los limitados recursos naturales de la tierra y en la capacidad de carga de los ecosistemas. Nuestro planeta alberga a siete mil millones de personas y se espera que llegue a nueve mil millones en 2050. Reafirmamos que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y expresamos nuestra profunda preocupación que los países en desarrollo son particularmente vulnerables y están experimentando un mayor impacto negativo del cambio climático, que está socavando gravemente la seguridad alimentaria y los esfuerzos para erradicar la pobreza, y también amenaza la integridad territorial de la viabilidad y la existencia misma de pequeños estados insulares".

Lo señalado es resultado del fracaso de las medidas adoptadas en este período por los organismos internacionales. Frente a ellos, en el marco de los planteamientos de la versión inicial del documento *El futuro que queremos*, surge una nueva propuesta, la "economía verde", un nuevo concepto que, a pesar de disfrazar de ambientalista al modelo de desarrollo, únicamente lo profundiza.

La "economía verde" constituye la mercantilización, privatización y financiarización de la vida, especialmente en el contexto de crisis económica. Es una de las estrategias del capital por recuperar la tasa de ganancia, basándose en convertir en mercancía a los ecosistemas. Como sucedió con el desarrollo sostenible, la economía verde incorpora aparentemente las críticas que se formulan al modelo civilizatorio destructor, pero con la condición de que los supuestos y lógicas fundamentales de ese modelo no sean cuestionados, especialmente en lo que se refiere a la confianza en el crecimiento económico; la fe ciega en el progreso, la ciencia, las "tecnologías verdes" [nanotecnología, agrocombustibles, geoingeniería, transgénicos, entre otras]



Las organizaciones y movimientos sociales se preparan para presentar alternativas en la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental paralela a Río+20.

o los mercados de carbono, como la alternativa a la crisis ambiental, cuando estas "verdades indiscutibles" no harán sino intensificar la crisis social y ecológica que enfrentamos.

En la lógica de la "economía verde", los recursos naturales del planeta son considerados materias primas para la producción industrial, como sumideros de carbono o para la especulación. Esto queda demostrado por el aumento de los acaparamientos de tierras a nivel mundial para la producción de cultivos destinados a la exportación y a los agrocombustibles.

Nuevas propuestas como la agricultura "climática inteligente", que promueve la "intensificación sostenible" de dicha actividad, encarnan también el objetivo de las corporaciones y los agonegocios de sobreexplotar el planeta usando la etiqueta "verde", y haciendo que las campesinas y los campesinos dependan cada vez más de insumos y semillas de elevados costos. Se está emitiendo una nueva generación de permisos de contaminación para el sector industrial, especialmente en los países desarrollados, a través de los mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD) y otros programas de servicios ambientales.

No hay duda que nos encontramos frente a los límites del planeta y la crisis terminal de este patrón civilizatorio de crecimiento sin fin y de guerra permanente en contra de las condiciones que hacen posible la vida. Por ello es cada vez más urgente detener la maquinaria de destruc-

ción sistemática del capitalismo, de la sociedad industrial y del imaginario del desarrollo.

### LA OTRA CUMBRE

El intento de "reverdeamiento" del capitalismo ha sido una alerta para que los movimientos sociales refuercen la resistencia y asuman el protagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis, que beneficien a los sectores más vulnerables y que alberguen un enfoque estratégico.

Una gran cantidad de organizaciones, colectivos y movimientos sociales a nivel regional y mundial han empezado a rechazar este concepto y plantean la necesidad de pensar en un modelo alternativo. Para ello están preparando la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, entre los días 15 y 23 de junio, coincidiendo con la Cumbre oficial.

Esta Cumbre tendrá lugar, también, en Río de Janeiro y constituye una respuesta desde la sociedad civil a este nuevo intento de imposición de los sectores minoritarios que toman las decisiones sobre el destino de la humanidad. Por esa razón, la Cumbre de los Pueblos aspira a proponer otras alternativas, que surjan de un proceso histórico de acumulación y convergencia de las luchas locales, regionales y mundiales, que tienen como marco político la lucha antineoliberal, anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y de profundo rechazo a cualquier tipo de discriminación, convirtiendo así a Río+20 en un

momento de reflexión y oportunidad para encarar los graves problemas que enfrenta la humanidad y demostrar el poder político del pueblo organizado.

La realización de esta Cumbre en América del Sur cobra un significado especial, ya que es una región en la cual los movimientos sociales locales se encuentran en constante lucha de resistencia a los impactos de los megaproyectos, que afectan a millones de habitantes, siendo gran parte de ellos las poblaciones originarias amazónicas y andinas. Es esta región un nuevo escenario de lucha entre los grandes capitales y el movimiento popular por los proyectos de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), y ahora los proyectos de mega hidroeléctricas, sumados a la deforestación, minería, colonización y la transformación del uso del territorio.

Es en este espacio que se organizarán las actividades paralelas a la Cumbre, en donde las organizaciones y los movimientos globales de la sociedad civil presentarán experiencias y proyectos que demuestran cómo se puede vivir en la sociedad de manera sostenible y solidaria, a diferencia del paradigma capitalista actual.

En el caso de Brasil, movimientos

temas abordados por los movimientos sociales.

Entre los puntos a discutir están el de vincular la lucha por la justicia social con la lucha por la justicia ecológica; señalar a los grandes y verdaderos responsables del cambio climático, los que exponen a cientos de millones de personas y al planeta en general a su destrucción. Hoy los efectos del cambio climático pueden ser apreciados con claridad y afectan especialmente a los países más pobres. Recordemos que el Perú se encuentra como uno de los países más vulnerables al cambio climático, junto con Honduras y Bangladesh.

Afirmar la necesidad de la soberanía alimentaria, rechazando el acelerado proceso de reconcentración de tierras, en donde las transnacionales vienen adquiriendo inmensas cantidades de territorio fértil, destinando estas tierras a fines diferentes que los de producir alimentos para el consumo doméstico, en países que se caracterizan por la dificultad que tiene su población para acceder a los alimentos por lo que presentan altos índices de desnutrición. Se expondrán las alternativas, desde la sociedad civil, frente a la crisis alimentaria que provoca que en el mundo de hoy existan casi mil millones de personas que padecen hambre.

Es importante que desde los movimientos sociales se levante la bandera de la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la humanidad, los ecosistemas y la biodiversidad, como respuesta a la mercantilización, privatización y financiarización de la vida, implícita en el concepto de "economía verde".

En ese mismo sentido, los movimientos sociales y la sociedad civil apuestan por una integración diferente a la que años atrás se buscaba imponer en la región con el Área de Libre Comercio de América (ALCA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) nos lo demuestran, por lo que se debe apoyar su fortalecimiento y permanecer en alerta constante frente a los intentos desestabilizadores externos.

La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental es una gran oportunidad para los sectores que históricamente se han encontrado excluidos y que actualmente son los más vulnerables frente a los fenómenos que hemos analizado. Es a partir de esta Cumbre de los Pueblos que se espera reafirmar los nuevos paradigmas y alternativas construidas por los movimientos políticos y sociales en este proceso histórico de resistencia y lucha por un futuro diferente.

La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental es una gran oportunidad para los sectores que históricamente se han encontrado excluidos y que actualmente son los más vulnerables frente a los fenómenos que hemos analizado. Es a partir de esta Cumbre de los Pueblos que se espera reafirmar los nuevos paradigmas y alternativas construidas por los movimientos políticos y sociales en este proceso histórico de resistencia y lucha por un futuro diferente.

La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental es una gran oportunidad para los sectores que históricamente se han encontrado excluidos y que actualmente son los más vulnerables frente a los fenómenos que hemos analizado. Es a partir de esta Cumbre de los Pueblos que se espera reafirmar los nuevos paradigmas y alternativas construidas por los movimientos políticos y sociales en este proceso histórico de resistencia y lucha por un futuro diferente.

## El cambio climático en Río

Rocío Valdeavellano\*

El calentamiento global y el cambio climático han puesto en riesgo la vida en el planeta. La implementación del desarrollo sostenible -acordada en 1992- fue reemplazada por una globalización neoliberal que generó las crisis que todos conocemos. Esta vez no podemos darnos el lujo de engañarnos.

Es urgente un viraje del paradigma del crecimiento ilimitado y extractivista -basado en la máxima obtención de ganancias- hacia un crecimiento diferenciado con una extracción selectiva, ambiental y socialmente responsable que priorice los bienes comunes; de la obsesión consumista a estilos de vida guiados por el buen vivir; del patrón de combustibles fósiles al de energías renovables.

Pero esto no se hará si el gato actúa de despensero. Es decir, si grandes corporaciones toman por asalto la biomasa y los territorios de las comunidades para mercantilizarlos bajo el manto de una mal llamada economía verde.

No permitamos que las políticas públicas sucumban ante la voracidad del mercado. Este debe sujetarse a controles y regulaciones. Para ello es necesario fortalecer las capacidades de actuación integral y coherente del Consejo Económico y Social [ECOSOC] con la Comisión de Desarrollo Sostenible que quien con eficacia las resoluciones de las Asambleas de las Naciones Unidas.

A contrapelo de las tendencias predominantes, pequeños productores rurales y urbanos, profesionales e intelectuales y movimientos ciudadanos han venido desarrollando en todo el mundo diversas iniciativas, experiencias y propuestas con orientaciones importantes para construir ese futuro con justicia social y ecológica al que todos aspiramos. Demandamos a los representantes de los países en la Cumbre de Río+20 de este año escuchar este mensaje tomando las decisiones que la humanidad espera sin ser atrapados por intereses de poderes económicos o cálculos políticos particulares.

\* Integrante del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCCIC) que impulsa la Campaña "Se mueve la Gente hacia Río+20": [www.mocic.org](http://www.mocic.org)





Rodolfo Bejarano

## ¿“Enverdecer la economía” o mantener los grandes negociados?

ble. Entre los acuerdos logrados en esa conferencia está la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y un programa de acción llamado la Agenda 21, en la que se abordaron las dimensiones sociales, económicas y ambientales de cara al problema de pobreza, exclusión y de deterioro del medio ambiente. También se establecieron acuerdos en temas importantes como la diversidad biológica, protección de bosques y cambio climático.

Luego vendría la reunión realizada en Johannesburgo en el 2002, en la llamada Cumbre de Río+10 a modo de hacer una revisión de los avances realizados a diez años de los acuerdos originales y establecer nuevos compromisos hacia adelante. Para los movimientos sociales esa cumbre fue un fracaso debido a lo pobre del contenido de los acuerdos y los compromisos poco concretos alcanzados en aquella oportunidad. Esta vez, la Cumbre de la Tierra regresa a la ciudad brasileña con el nombre de Río+20 y, en el mismo sentido que tuvo la conferencia anterior, se evaluarán los progresos y los nuevos retos para alcanzar el desarrollo sostenible, pero

con la diferencia saltante que uno de los temas a tratar será el de la llamada “economía verde”.

Esta idea fue planteada por primera vez en 1989 por un grupo de investigadores y luego es adoptada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 2009, incorporando el concepto y sus principios en los documentos oficiales como un componente principal para avanzar en el camino hacia el desarrollo sostenible. La economía verde es definida como “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas”. Sin embargo, esta nueva propuesta ha recibido muchas críticas, sobre todo desde la sociedad civil internacional, que ve en la economía verde una forma de lograr que se reaviven los viejos esquemas de producción, comercio y consumo, y a la vez se convierta en una oportunidad para los grandes negociados a costa de la naturaleza. No es coincidencia que la economía verde se plantee poco después del estallido de la crisis financiera mundial.

La economía verde está basada en el crecimiento económico –similar al crecimiento verde planteado por la Organización Mundial del Comercio (OMC)– y se sustenta en la premisa de que los recursos naturales constituyen el capital natural que debe ser conservado en convivencia con toda actividad económica. En ese sentido, el PNUMA define diez sectores como los prioritarios para transitar hacia el “enverdeamiento de la economía”, entre ellos agricultura, pesca, energía renovable, industria, construcción, transporte y turismo.

Una primera crítica que se desprende de lo anterior es la persistencia de mantener el crecimiento de la producción y el consumo a lo largo del tiempo, lo que supone el carácter ilimitado de uso y aprovechamiento de los recursos, cosa que no es así. No basta con sólo reemplazar sectores más contaminantes por los menos contaminantes, sino que hay que establecer límites para no sobrepasar la capacidad que tiene la naturaleza de regenerarse.

El otro tema de controversia es la forma en que se pretende llegar a que las inversiones estén dirigidas a estos “sectores verdes”, lo que se hará a través del uso de instrumentos y mecanismos que sirvan de incentivo para actividades amigables con el medio ambiente

y a la vez desincentiven la incursión en la economía “marrón”. Pero existen muchas dudas respecto a la valoración que se hace de los impactos de las actividades económicas sobre el medio ambiente, puesto que considerar a la naturaleza como un “capital” no hace más que reforzar la idea de mercantilización de los recursos.

La Cumbre de Río+20 pretende legitimar la adopción de un nuevo patrón de crecimiento económico basado en actividades supuestamente más orientadas al desarrollo sostenible y ya ha recibido el apoyo del G20. Sin embargo, la forma en que están planteadas y dirigidas algunas de las propuestas en sectores muy específicos y sensibles –como el cambio de la matriz energética– afectaría en gran medida a regiones con gran riqueza natural como Latinoamérica.

### No basta con reemplazar sectores contaminantes: hay que establecer límites para no sobrepasar la capacidad que tiene la naturaleza de regenerarse.

Nuestro país es uno de los territorios privilegiados en cuanto a biodiversidad se refiere, pero también muy vulnerable frente a las consecuencias que puede traer el calentamiento global. El riesgo al cual el Perú está expuesto por la mayor ocurrencia de desastres y la escasez de agua debido al cambio climático puede exacerbarse si no hay una política adecuada sobre aquellos sectores económicos que pretendemos impulsar en medio de este panorama. En ese sentido, cualquier intento por promover nuestra riqueza natural, histórica y cultural puede verse seriamente amenazado si toda actividad productiva que se realice no toma en cuenta un manejo adecuado de nuestros recursos y el respeto por la dignidad de las personas.

La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental a realizarse en paralelo a la Cumbre de las Naciones Unidas nos plantea a la sociedad civil el reto de seguir analizando y tomar una posición respecto al modelo económico que queremos de modo que se asegure la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras en una situación de equidad y bienestar para todos.



### Brasil y el nuevo (des)orden

Antonio Zambrano Allende

Los procesos de formulación de la zonificación ecológica económica han concluido en varias regiones de nuestro país; en las que no, están en plena construcción, mientras que en otras ya inician los planes de ordenamiento territorial más participativos, en algunos casos, y más técnicos, en otros.

Estos procesos junto con todos los desarrollados –desde el retorno a la democracia y el avance tímido del proceso de descentralización– han procurado, además de transferir funciones y competencias a los niveles menores del Estado, acercar a la población a tomar decisiones efectivas en su comunidad.

De otro lado, el aumento de las grandes inversiones han –como su nombre lo sugiere– invertido en el territorio y los procesos participativos que avanzan, desconociendo y modificando la vida a partir de proyectos fundamentalmente mineros, hidrocarburíferos, hidroeléctricos y viales.

Sobre ello, resalta la presencia y crecimiento del stock de inversión brasileño en el Perú, que es el quinto más importante en los últimos años (luego de España, Estados Unidos, Sudáfrica y Chile) y continúa creciendo por sus translatinas (transnacionales latinoamericanas) en la construcción de infraestructura vial y energética. Aquí es emblemático el caso de Odebrecht.

En la actualidad, con la pretensión de iniciar el proceso de integración, la firma del acuerdo energético Perú-Brasil y, por añadidura, el clima de emergencia que se ha desatado ante las necesidades energéticas del crecimiento minero y la penetración de las nuevas inversiones en el territorio amazónico y andino nacional amenazan con desbaratar no sólo los avances en la planificación interna del desarrollo, sino la vida económica, social y cultural de nuestros pueblos.



**Megaproyectos.pe**  
www.megaproyectos.pe

CARRETERAS

MINERAS

PUERTOS

REPRESAS



HIDROELÉCTRICAS

**¿ALGUNO DE ESTOS PROYECTOS AFECTA O AMENAZA TU COMUNIDAD?**

**¡DENÚNCIALO!**

**ENVÍA UN MENSAJE DE TEXTO AL**

**954-887-593**



**UTILIZA ESTOS CÓDIGOS PARA RESUMIR EL MENSAJE**  
(MÁXIMO 140 CARACTERES)

**EJEMPLO**

IR Olmos, Chiclayo. PEOT desaloja a 100 comuneros. Carlos Pérez.

ENVIAR

- (AM)** Agrocombustibles y monocultivos
- (PA)** Puertos y aeropuertos
- (IR)** Irrigación
- (HC)** Hidrocarburos
- (RH)** Represas e hidroeléctricas
- (MI)** Minería
- (CA)** Carreteras e hidroeléctricas